



Rosario, enero de 2006

El litoral, 30 años después. Sangre, dinero y dignidad

Por Carlos del Frade

Prólogo

El golpe de estado de treinta años atrás comenzó mucho antes.

En la región del litoral, en el territorio de las seis provincias que integraban el Segundo Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario, la decisión de acabar con el proyecto revolucionario encarnado en jóvenes y trabajadores se tomó en el corazón de las grandes estancias correntinas, en los escritorios de las empresas celulosas y yerbatales misioneras, en las oficinas de las fábricas algodonerías chaqueñas, en las contratistas entrerrianas y santafesinas y en los edificios que reunían a los dueños de las dinámicas industrias que iban de San Nicolás hasta Puerto San Martín, haciendo eje en la cuna de la bandera.

Se mató para robar.

Un proceso contrarrevolucionario que concentró la riqueza en pocas manos.

Clave del presente.

Se mató para generar obediencia debida al orden impuesto por las minorías.

Una masacre que debía extirpar la urgencia de la rebeldía y controlar las democracias emergentes, como fuera dicho en innumerables documentos militares y de los propios partidos políticos suspendidos o proscriptos.

Una democracia obediente.

A través de la muerte desbocada, del recuerdo de la matanza, de los medios de comunicación en manos de los amigos de los proveedores del genocidio y a través de un sistema educativo descuartizado en aras del recorte presupuestario.

El litoral argentino es una síntesis del proyecto político y económico regional que tuvo su punto máximo de aplicación en los años noventa.

Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe fueron el territorio desde donde emergieron figuras como Martínez de Hoz, Antonio Caggiano, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, Cristino Nicolaidis, los Romero Feris, Alfredo Yabrán, Narvajas Artaza, Brinzoni, Bonamín, Martín Balza y extraños negociados que se convirtieron en emblemas de la corrupción estructural como Yacyretá, las defensas para las inundaciones en el Chaco que nunca pararon el agua, la privatización de tierras fiscales, la mayoría de los muchachos que fueron a morir en Malvinas, el contrabando de cigarrillos y marihuana y los peores índices de mortalidad infantil e indigencia que registra la geografía argentina tres décadas después.

El presente de necesidades es hijo directo de los intereses impunes que desataron la orgía de sangre.

Intereses que estuvieron más allá de los centros clandestinos de detención.

Que condenaron experiencias de conciencia popular que cuestionaban la continuidad de los privilegios como si fueran eternos.

Desde las seis provincias del litoral también emergieron figuras trascendentes y muy pocas estudiadas durante la democracia: Vicente Zazpe, Alberto Devoto, las ligas agrarias, el Movimiento Agrario Misionero, el sindicalismo clasista del ex cordón industrial del Gran Rosario, la primera convocatoria empresaria en contra de la dictadura y universidades y escuelas públicas que intentaron vincular el conocimiento con las necesidades existenciales de las mayorías.

A pesar del casi millar de desaparecidos que sufre la región, la represión no pudo desterrar la naturaleza del compromiso político de los años setenta. Hay gambetas del amor a cualquiera de las formas de la muerte. Insistencias que buscan futuros mejores.

Pero al escuchar, leer e investigar sobre los hechos y protagonistas de la vida colectiva de las seis provincias del litoral surgen algunas convicciones en torno a los varios por qué que se abren treinta años después.

- El terrorismo de estado empezó antes del 24 de marzo de 1976.

Quizás haya que remontarse, en la región, a los gobiernos radicales y peronistas que generaron matanzas de pueblos originarios a favor de los terratenientes lugareños.

- Se mató para robar.

Hacia noviembre de 1976 el poder de fuego de la guerrilla estaba vencido desde el punto de vista militar tal como lo confirman los propios documentos del Ejército. Sin embargo el llamado proceso se quedó siete años. No había ninguna necesidad “militar”. Había otras razones. Razones de pesos.

En 1975 había 8 mil millones de dólares de deuda externa.

En 1983, las acreencias sumaban 45 mil millones.

Se robaron 37 mil millones de dólares.

Más de un millón de dólares por cada uno de los 30 mil desaparecidos que denuncian los organismos de derechos humanos.

Una clara prueba de la inexistencia de dos demonios. Mientras unos peleaban por cambiar la sociedad, el terrorismo de estado se dedicó a instalar un esquema de mafias, asociaciones ilícitas y corrupciones varias.

- Los dirigentes políticos, gremiales, empresariales y eclesiásticos de 1983 iniciaron un proceso democrático muy lejos de las urgencias sociales y mantuvieron invictos los intereses que promovieron y se favorecieron con la dictadura.

- Los poderes judiciales, provinciales y federales, se armaron de acuerdo a los intereses de aquellas dirigencias y lejos de buscar la verdad sobre los por qué del genocidio, decidieron castigar a los mayores responsables físicos.

- Esa dirigencia política es clave para entender las secuencias históricas. En las seis provincias del litoral quedaron en el poder de los estados de las seis provincias los que ya tenían contacto con las estructuras represivas aún antes del 24 de marzo de 1976.

- Hubo acuerdos, negociaciones, entre distintos dirigentes de diferentes sectores con los militares y fuerzas de seguridad en cada una de las provincias del litoral para llegar a la democracia. El pacto sindical militar denunciado en abril de 1983 forma parte de una historia todavía no estudiada ni discutida sobre sus alcances.

- El juicio a las Juntas Militares de 1985, los pedidos por la verdad histórica y la reciente derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, generaron la permanente búsqueda de culpables físicos que produjeron las desapariciones, pero impulsaron bolsones de olvidos deliberados en torno a las responsabilidades sectoriales que sostuvieron y hasta impulsaron, en un primer momento, la toma del poder de parte de los militares.
- La puesta en práctica de un “MERCOSUR de la muerte”, el llamado Plan Cóndor, parece haber sido iniciada mucho antes de la región del litoral.
- La mirada en torno a los treinta años del golpe militar también necesita completarse, por lo menos, con una discusión sobre la profundidad de tres etapas democráticas. La que se dio entre 1973 y 1976, donde los aparatos represivos funcionaron como si nada, se multiplicaron y generaron la información básica para el terrorismo de estado que luego del 24 de marzo se desencadenaría con una fuerza inédita hasta entonces; la de 1983 hasta 2001, en la que la construcción de la impunidad fue paralela a la concentración de riquezas y la emergente luego de diciembre de 2001 y que tiene su correlato en la reapertura de las causas penales contra los delitos del terrorismo de estado.
- La actuación de la justicia ordinaria no parece tener en cuenta lo probado en el juicio a las juntas en 1985. Volver a relatar los hechos vividos y sufridos por las víctimas carece de sentido común. Un volver a empezar que favorece a los asesinos y los socios de guante blanco que se beneficiaron con sus crímenes.
- Merece destacarse el trabajo de todos los organismos de derechos humanos y sus abogados. Sin ellos sería imposible haber llegado a instancias de justicia como las que ahora parecen asomar en los tribunales de todo el país.
- Asimismo es fundamental apuntar a la educación popular de los hechos producidos en la Argentina de los últimos cincuenta años para lograr otro tipo de conciencia política. Habrá que registrar los beneficiarios del genocidio y hacerlos públicos en lo cercano. Ver la evolución histórica de sus intereses y suertes personales y democratizar el conocimiento sobre el por qué del compromiso y la lucha de los que intentaron construir una revolución en la década del setenta.
- Es necesario apreciar también que, como sucede desde lo popular, los sectores concentrados de la economía dispusieron de los mismos intérpretes para representar el mismo guión en los últimos cuarenta años. Martínez de Hoz fue el encargado de cerrar ingenios azucareros en los años sesenta, presidente de Acindar en los setenta y ministro de economía de Videla. Alcides López Aufranc fue sedicioso en los sesenta en la disputa entre azules y colorados, represor del cordobazo y luego gerente de Acindar, en los años noventa. Galtieri fue represor del rosario y después titular del Segundo Cuerpo de Ejército para terminar convirtiéndose en el hacedor de la guerra de Malvinas. Romero Feris fue funcionario de la dictadura de Viola y después gobernador de Corrientes y a principios del tercer milenio, uno de los integrantes de la familia, se propone como referente de un gran polo de centroderecha en el país. Una de las figuras claves en la represión del litoral, Agustín Feced, participó de la persecución a los resistentes peronistas a principios de los años sesenta, emergió como organizador del SIDE en el litoral desde Misiones entre 1973 y 1976, le ofrecieron la comandancia de la Triple A luego del asesinato del comisario Villar y terminó siendo interventor en la policía rosarina entre 1976 y 1979 para luego ser destinado en misión secreta hacia Chile en medio del conflicto por el canal del Beagle. Detrás de ellos hubo intereses económicos, políticos y militares que los erigieron como representantes de un sistema y que los mantuvieron durante décadas para volver a representar el papel de siempre. El guión que les interesa a los privilegiados. Sangre y dinero fueron los brazos de la tenaza que se abrió el 24 de marzo de 1976. Y esa es una pauta de los últimos cincuenta años, tanto en el litoral como en toda la geografía argentina.

Este libro es una investigación periodística que parte desde el presente.

Indaga desde enero de 2006 las huellas abiertas desde 1976.

También quiere abrir un debate sobre los olvidos sectoriales, las responsabilidades que tuvieron dirigentes políticos, empresariales, eclesiásticos, gremiales y sociales en torno a la masacre y su consiguiente sistema para pocos.

¿Por qué la democracia de 1973 no pudo o no quiso dismantelar el aparato represivo que venía creciendo desde Onganía en adelante?

¿Por qué gran parte de la dirigencia gremial tuvo contactos con militares e integrantes de la Triple A?

¿Por qué cuesta tanto investigar judicialmente los crímenes de la Triple A?

¿Por qué la mayoría de los partidos políticos apoyaron la dictadura en sus primeros tres años?

¿Por qué la iglesia institución no generó una mayor difusión sobre la pastoral de Alberto Devoto y Ponce de León?

¿Por qué la CGT no realizó ningún relevamiento sobre delegados y dirigentes gremiales desaparecidos y encarcelados en todo el país?

¿Por qué continúa vigente la Ley de Radiodifusión de la dictadura?

¿Por qué las policías provinciales siguen siendo un poder político casi autónomo?

Treinta años después del golpe militar, el litoral argentino sigue acunando historias de dignidad asombrosas.

Rebeldías que emocionan, gambetas del amor a cualquier forma del odio que contagian optimismo y esperanzas.

Eso también forma parte de este libro.

Postales existenciales que devuelven el sentido a la palabra futuro y que busca un mejor lugar para los chicos, para los que representan la inverosímil resistencia de la ternura en una tierra plagada de impunidades y olvidos.

Quizás porque los habitantes de las seis provincias del litoral saben que son descendientes de los guaraníes, los buscadores permanentes de la tierra sin mal, ese lugar en donde todos y cada uno tendrán la posibilidad de ser felices.

Por eso la memoria, la verdad, el amor y la justicia siguen avanzando.

Porque treinta años después, en el litoral argentino hay tantas cuestiones pendientes como esperanzas recién nacidas.

De esto se trata lo que sigue.